

DEMANDAS Y RESPONSABILIDADES

LA INTERVENCIÓN DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS EN LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN

EXISTEN MUCHAS SENTENCIAS QUE HAN ACABADO CONDENANDO A TÉCNICOS QUE INICIALMENTE NO HABÍAN SIDO OBJETO DE DEMANDAS POR FALLOS EN LA OBRA, PERO QUE SE VEN INVOLUCRADOS POR OTROS AGENTES.

POR Jorge Heras de los Ríos. Asesoría jurídica del Colegio de Aparejadores de Madrid
ILUSTRACIÓN José Luis Ágreda

Resulta muy habitual en la práctica procesal que demandas dirigidas inicialmente contra promotores y arquitectos acaben involucrando a los directores de la ejecución de la obra (arquitectos técnicos) al entender aquellos demandados inicialmente que también estos profesionales han sido causantes de las deficiencias que se le reclaman.

Al margen de la dificultad personal de entender que alguien con el que se formó equipo y se tuvo una relación personal buena, o al menos razonable, durante la ejecución de las obras, consensuando la plasmación de las determinaciones del proyecto a la realidad de la obra, te involucre en la desagradable experiencia que supone un procedimiento judicial, del que se pueden derivar consecuencias económicas muy graves para tu patrimonio, debemos tener presente que esta intervención forzada busca sobre todo repartir responsabilidades y limitar el daño de los que han sido inicialmente demandados.

Muchas veces la propia demandante (comunidad de propietarios, particulares dueños de la vivienda, cooperativa, promotora, etc), ha realizado un análisis previo de las causas de la deficiencia reclamada, incluso mediante la intervención de un perito de parte, y

consideran que la misma tiene su origen en un defecto de proyecto o en las modificaciones introducidas en el mismo durante la obra, por lo que no tiene interés en reclamar la reparación correspondiente a otros agentes de la edificación (constructora, dirección de ejecución, suministradores de materiales...).

Ello es así por el importante riesgo económico que representa, en la vía civil, una posible condena en costas debido a la absolución de agentes que fueron demandados sin tener una efectiva responsabilidad en la causación de los daños demandados. Por ello, se debe ajustar mucho y con cuidado frente a quien se va a dirigir la posible demanda, pues la estimación parcial de la misma frente a unos agentes y la absolución de otros de los involucrados en el juicio le supone a la demandante asumir los importantes gastos de defensa y representación (incluso los de las periciales realizadas por los no condenados para justificar su posición) de estos últimos, limitando mucho la rentabilidad de la actuación procesal.

A pesar de esta primera decisión del demandante, lo más habitual es que los demandados iniciales intenten desviar la responsabilidad que se les reclama

hacia otros de los intervinientes en las obras. Para ello se acogen a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación, en su Disposición Adicional 7ª, que establece lo siguiente:

Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido proceso. La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento de los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes llamados al proceso de que, en el supuesto de que no comparecieran, la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos.

Ahora bien, para involucrar en el procedimiento a un agente de la edificación que no había sido demandado, no basta con invocar la LOE, sino que ha de acudirse a la figura de la 'intervención provocada', que regula el art. 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone:





14.2. Cuando la Ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1. El demandado solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio...

2. El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda... y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que proceda.

Aquí empiezan las dificultades. En primer lugar porque ni esta norma, ni la LOE establecen que estos agentes que han sido traídos a la fuerza al juicio deban tener la consideración de demandados. En el ámbito civil español, quien decide sobre lo que se pide al juzgado y frente a quien se pide (los posibles demandados) es la parte demandante. Ni el juez, ni el resto de los demandados pueden obligar al reclamante a pedir otra cosa o frente a otras personas. Por ello, cuando por ejemplo, el arquitecto demandado soli-

cita que el aparejador o arquitecto técnico sea llamado al proceso, se le da traslado, en primer lugar al que puso la demanda, para que indique si está conforme con esta intervención, si desea la condena de este nuevo técnico, o, por el contrario, si esta ampliación de sujetos no le aporta nada o carece de interés en reclamar al nuevo técnico.

El problema se plantea principalmente en este último caso, cuando el demandante no desea ampliar su reclamación frente a este aparejador del ejemplo o, directamente, se opone a que sea traído a su procedimiento y, a pesar de ello, el juez decide seguir adelante también con nuestro técnico.

SENTENCIAS

Hasta la fecha han sido muchas las sentencias que han acabado condenando a técnicos que no habían sido objeto de demanda inicialmente, pero que se vieron involucrados por la llamada de otros agentes que sí habían recibido la reclamación judicial.

Muy recientemente se ha dictado una sentencia del pleno del Tribunal Supre-

mo (de 26 septiembre 2012, Roj: STS 6284/2012), que ha clarificado la situación en la que quedan estos técnicos o agentes involucrados por la llamada de algún demandado. La sentencia concluye que los mismos no pueden ser objeto de condena, aunque las responsabilidades que se establezcan en la resolución judicial ya no podrán ser discutidas en un procedimiento posterior, por lo que, en caso de que se vuelva a dirigir una nueva demanda contra ellos, los hechos discutidos en el primer procedimiento (en el que no se les pudo condenar) quedarán ya fijados como ciertos.

El supuesto de hecho que contempla esta sentencia es el siguiente: la demandante contrató los servicios de una empresa de arquitectura para proceder a la ejecución de un edificio de viviendas con locales y apartamentos en la población de Buñol. En cumplimiento de esta relación contractual, el despacho de arquitectura redactó el proyecto de ejecución de la obra y asumió la dirección durante la fase de ejecución, en la que se detectó un exceso en la altura de las construcciones sobre la altura de la

Hasta la fecha han sido muchas las sentencias que han condenado a técnicos que no habían sido objeto de demanda inicialmente



cornisa por encima de 3,50 metros, siendo esta la máxima permitida por las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Buñol en el momento del otorgamiento de la licencia. Esta actuación causó un daño a la entidad promotora derivado de la demolición parcial de la cubierta para ajustar la cumbrera a la normativa urbanística y licencia de obras, que se valoró en 227.084,03 euros.

En lo que aquí interesa, intervino también en la obra un arquitecto técnico a quien la demandada solicitó se le notificase la pendencia del proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando se dio traslado de tal petición a la demandante, ésta manifestó que no se oponía pero que era el demandado quien llamaba al aparejador. Lo que no hizo fue ampliar la demanda ni solicitar la condena del arquitecto técnico.

Aunque la sentencia del juzgado responsabilizó al aparejador del daño: “por error en el planteo, más en concreto, por falta de una verdadera comprobación del mismo o por la omisión de la subsanación de haberse realmente comproba-

do”. Sin embargo, desestimó la demanda puesto que no “contiene la menor alusión a que el problema de altura de la cubierta fuera debida a un incumplimiento contractual del arquitecto técnico; y además no se había producido una ampliación subjetiva de la demanda, ni una petición de condena”.

La promotora de las viviendas recurrió en apelación y la Audiencia condenó al estudio de arquitectura, al que considera responsable exclusivo del daño puesto que no verificó ni comprobó que el replanteo estaba realizado correctamente cuando era su obligación, y se ratificó en la imposibilidad de condenar al arquitecto técnico al no haber sido demandado.

Lógicamente, los arquitectos recurrieron en Casación ante el Tribunal Supremo, que dictó la sentencia que ahora comentamos y que recoge las siguientes reflexiones:

La llamada al tercero a instancia de la parte demandada tiene su fundamento legal en la Disposición Adicional 7ª LOE.

La aplicación de esta Disposición Adicional ha dividido tanto a las Audiencias Provinciales como a la doctrina en lo relativo a la incorporación de terceros al proceso a su condición de parte en el mismo:

a) Para algunas audiencias el tercero debe ser tenido como parte demandada y, por tanto, debe figurar en la parte dispositiva de la sentencia, y debe ser alcanzado por todos sus pronunciamientos incluido el que verse sobre las costas (SSAP de Baleares -Sección 3ª- de 2 de mayo de 2003 y - Sección 5ª- de 20 de julio 2011; de Albacete -Sección 2ª- de 6 de octubre de 2008, recogiendo el acuerdo en pleno del mismo tribunal de fecha 6 de octubre de 2008; de Asturias -Sección 1ª- de 1 de julio de 2010).

b) Según otras, para poder condenar a alguno de los intervinientes en el proceso

constructivo ‘llamado en garantía’ de forma provocada por algún codemandado, es precisa la solicitud de condena expresa por parte de alguno de los demandantes por un elemental y obligado respeto a los principios dispositivos, rogación y congruencia, lo cual no significa que la sentencia no pueda tener consecuencias frente a dicho tercero pues en virtud de esa intervención procesal, que le ha permitido defender sus propios intereses, debe quedar afectado por las declaraciones que en ella se hagan, las cuales no podrán ser discutidos en un posterior y eventual proceso (SSAP de Burgos -Sección 3ª- de 6 de febrero de 2010, recogiendo el acuerdo del pleno de esta Audiencia Provincial, de fecha 15 de noviembre de 2011; de Málaga -Sección 4ª- de 13 de septiembre de 2011).

La sala acepta este segundo planteamiento.

La incorporación al proceso de quien no ha sido demandado en su condición de agente de la construcción se autoriza en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Ordenación de la Edificación y se activa procesalmente a través del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El tercero cuya intervención ha sido acordada solo adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al mismo.

En el proceso civil... “la cualidad de parte demandada corresponde al sujeto frente al que el demandante pretende la tutela ante los tribunales. Es el sujeto al que ha de afectar –por la situación que ocupa en una relación jurídica– la decisión solicitada en la demanda, y es esa situación en la relación jurídica lo que le legitima pasivamente para ser demandado. Así se deduce de lo dispuesto en los artículos 5.2 y 10 LEC, en coherencia con el principio dispositivo y de aportación de parte que rige el proceso civil. El sujeto solo adquiere la condición de parte demandada si frente a



él se ejercita una pretensión. En consecuencia, el tercero cuya intervención ha sido acordada solo adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al tercero. Si el demandante no se dirige expresamente una pretensión frente al tercero... (este) no será parte demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del tercero. (...)

La situación del tercero que no ha sido demandado es la posición de quien está al cuidado del litigio, como sujeto interesado al que, sin soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el proceso dirigida a conseguir que este tenga un resultado lo menos adverso posible para los intereses del tercero que puedan verse afectados de forma refleja (...)

(...) el emplazamiento del llamado como demandado no aceptado por el actor, no equivale a una ampliación forzosa de la demanda que permita su absolución o condena, mientras que la oponibilidad y ejecutividad del fallo de la sentencia, a que se refiere la disposición transcrita, supone, de un lado, que quedará vinculado por las declaraciones que se hagan en la sentencia a propósito de su actuación en el proceso constructivo, en el sentido de que en un juicio posterior no podrá alegar que resulta ajeno a lo realizado y, de otro, que únicamente podrá

ejecutarse la sentencia cuando se den los presupuestos procesales para ello, lo que no es posible cuando ninguna acción se dirige frente a quien fue llamado al proceso y como tal no puede figurar como condenado ni como absuelto en la parte dispositiva de la sentencia”.

A la vista de esta contundente resolución judicial podría parecer que la cuestión de si cabe o no la condena de un técnico llamado al proceso por quien fue objeto de demanda estaría resuelta de forma definitiva en sentido negativo.

Sin embargo, el caso contemplado y los referidos en las sentencias que invoca el Supremo en ese texto, son anteriores a la reforma introducida por la Ley 13/2009, mediante la cual se añade una nueva regla 5ª al art. 14 de la LEC (el de la intervención provocada), mediante la que parece exigirse que el juez resuelva en sentencia sobre si condena o absuelve al tercero llamado al proceso por el demandado principal. Textualmente indica:

Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales.

Lógicamente, esta novedad no pudo ser tenida en consideración al resolver sobre un supuesto en el que, al tiempo

de la demanda, no estaba todavía vigente la modificación legal en cuestión.

Ello ha llevado al magistrado Vicente Magro Servet (presidente de la Audiencia Provincial de Alicante) a analizar la situación, en un interesante artículo titulado: ‘La nueva regla 5ª del art. 14,2 LEC, la intervención provocada y la exigencia de resolver en sentencia sobre el tercero llamado al litigio’ (publicado en la *Revista de Jurisprudencia*, número 1, el 5 de mayo de 2011).

En el mismo concluye que la reforma introducida en la Ley 13/2009 en el art. 14,2,5º - viene a señalar claramente la respuesta que en materia de costas debe darse para cuando el llamado al proceso es absuelto, por lo que se deduce que la posición válida que hay que mantener es la de que los terceros llamados al procedimiento adquieren la condición de parte y por tanto, en estos casos el juez debe condenar, en cuyo caso le impone las costas causadas, o absolver, en cuyo caso se las impone al demandado que le ha traído al proceso, ya que era obvio que no se las podía imponer al actor que no le había demandado. Por ello habrá que esperar para ver si la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo va fijando la línea a seguir en los juzgados, o si se mantiene la polémica antigua y se adhieren a la opinión cualificada de éste último magistrado. 